



RESPONSABILIDAD FISCAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD—IGUALES

Oxfam en Uganda: una fiscalidad justa a través de una incidencia política basada en datos empíricos y la ciudadanía activa

Centro de conocimiento de gobernanza y ciudadanía



OXFAM

RESPONSABILIDAD FISCAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD - IGUALES

OXFAM EN UGANDA: UNA FISCALIDAD JUSTA A TRAVÉS DE UNA INCIDENCIA POLÍTICA BASADA EN DATOS EMPÍRICOS Y LA CIUDADANÍA ACTIVA

INTRODUCCIÓN

Oxfam en Uganda colabora con organizaciones de la sociedad civil para amplificar la voz y poner de relieve las necesidades de la ciudadanía ugandesa en relación con el sistema fiscal del país, que determina la fiscalidad y el gasto público. A través de su **programa de financiación para el desarrollo**, Oxfam promueve la justicia fiscal para abordar la desigualdad en el país fomentando el empoderamiento de la ciudadanía para que pueda ejercer sus derechos a través de la colaboración activa con quienes ostentan el poder. La ciudadanía participa en conversaciones sobre recaudación de ingresos públicos (fiscalidad) y gasto público en salud, educación, desarrollo social y agricultura, instando así a una mayor transparencia en la gestión de las finanzas públicas. En este estudio de caso se demuestra el poder que tiene actuar de manera coordinada y rápida, contando con el respaldo de una amplia red ciudadana, a fin de alterar políticas fiscales regresivas. A su vez, ilustra cómo la ciudadanía puede mejorar la gestión de las finanzas públicas tanto a nivel local como nacional.

CONTEXTO

La población de Uganda está creciendo rápidamente, con una media de seis hijos por familia. Cerca del 70% de la población tiene menos de 25 años.¹ Las y los jóvenes encuentran dificultades para acceder a la educación: muchos no llegan a terminar la enseñanza primaria y tienen incluso más dificultades para encontrar trabajo. La mayoría de la población vive en zonas rurales, y el 85% depende de la agricultura de subsistencia. En este contexto, la desigualdad está aumentando: el 10% de la población más rica percibe el 35% del ingreso nacional bruto, mientras que el 10% más pobre tan solo el 2,5%.² Además, el sistema fiscal regresivo existente en el país está agravando esta



situación. Las personas con bajos ingresos soportan la mayor parte de la carga fiscal, y el ciudadano promedio encuentra cada vez más dificultades para ganarse la vida y acceder a la educación y a los servicios de salud.

Ante esta difícil situación, la población anhela servicios públicos más accesibles y de mayor calidad. La población ugandesa muestra un interés creciente en ejercer su derecho a participar en los procesos políticos que definen sus vidas, como aquellos que determinan la fiscalidad y el gasto público, y solicita una mayor transparencia y rendición de cuentas en la provisión de los servicios públicos. Las y los ciudadanos y los actores de la sociedad civil que se preocupan por la gobernanza, la constitución y la reforma electoral están realizando un seguimiento de las restricciones del espacio del que disponen para abordar estas cuestiones. Periodistas y organizaciones de la sociedad civil se encuentran entre los afectados por dichas restricciones, que incluyen un marco legislativo que limita libertades básicas, como el derecho de asociación y reunión. El espacio disponible para que la ciudadanía pueda ser crítica se está reduciendo de manera gradual en muchos frentes, aunque parece que hay **un poco más de espacio** para discutir los procesos presupuestarios nacionales.

LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN UGANDA

Con el fin de comprender y de influir de forma eficaz en el **sistema de gestión de las finanzas públicas**, es necesario conocer y comprender la situación económica actual del país. A pesar de los esfuerzos que lleva realizando el Gobierno de Uganda desde los años noventa para ampliar la base fiscal mediante la aplicación de impuestos, el gasto público sigue superando a los ingresos. Se prevé que el déficit fiscal de Uganda ascienda al 8,7% del producto interno bruto (PIB) en 2020, en comparación con el 5,8% actual.³ El gasto público total del país pasó de 5300 millones de dólares estadounidenses en el ejercicio fiscal 2014/15 a 6900 millones en 2018/19.

No obstante, el margen fiscal del Gobierno para invertir en sectores sociales clave se está reduciendo por un cúmulo de factores, como dar prioridad a sectores como el de la infraestructura y la seguridad, así como el mayor coste del servicio de la deuda (que ascendió un 25,1% en 2019/20).⁴ Este mayor peso de la deuda se debe al interés que debe pagarse en relación con el volumen pendiente de valores públicos y préstamos contraídos por el país para abordar su creciente **déficit presupuestario** y que proceden de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. En la actualidad, la deuda pública de Uganda asciende al 41,5% de su producto interior bruto (PIB), y se prevé que alcance un pico de 49% en 2021.⁵ Esto está generando un círculo vicioso de déficit que no deja de crecer, y los consiguientes préstamos que el país asume para abordar la deuda.



CUADRO 1: ¿QUÉ CONLLEVA LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS?

La gestión de las finanzas públicas implica un conjunto de leyes, normas, sistemas y procesos que utilizan los gobiernos (tanto a nivel nacional como subnacional) para movilizar ingresos, asignar fondos públicos, realizar gastos públicos, rendir cuentas financieras y llevar a cabo auditorías. En esencia, consiste en gestionar recursos públicos de una manera eficiente, transparente y eficaz, rindiendo cuentas ante la ciudadanía.

El Gobierno de Uganda tiene una estrategia concreta de gestión de fondos públicos (entrada y salida de dinero, es decir, recaudación fiscal y gasto público), que incluye los siguientes objetivos:

- **Asignación estratégica de recursos:** asignar recursos a las prioridades establecidas en el Segundo Plan de Desarrollo Nacional (NDPII).⁶
- **Control** de los ingresos, gastos y deuda pública.
- **Eficiencia operativa:** maximizar la rentabilidad y el uso óptimo del dinero.
- **Transparencia:** implementar todas las actividades con la mayor claridad posible.
- **Rendición de cuentas:** conseguir que todas las partes interesadas sean responsables de sus actos en su gestión de los recursos públicos.

Oxfam en Uganda y sus organizaciones socias están trabajando para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas a ambos lados del sistema fiscal: la recaudación fiscal y el gasto público. En este estudio de caso nos centramos en los aspectos de la recaudación fiscal y el gasto público, demostrando el poder de una actuación rápida y coordinada, respaldada por una amplia coalición ciudadana a la hora de reformar políticas fiscales regresivas y solicitar un mayor gasto público en sectores sociales clave, rindiendo cuentas al respecto. También ilustramos cómo la ciudadanía puede mejorar la gestión de las finanzas públicas tanto a nivel local como subnacional y nacional.

REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD A TRAVÉS DE UNA FISCALIDAD JUSTA

Oxfam en Uganda lleva colaborando desde 2014 con la organización socia SEATINI (Southern and Eastern African Trade, Information and Negotiations Institute) en el Fair Tax Monitor (seguimiento de fiscalidad justa).⁷ El Fair Tax Monitor es una herramienta de investigación que la sociedad civil puede utilizar para identificar los principales problemas del sistema fiscal de un determinado país, evaluar el sistema a partir de sus cualidades redistributivas y recomendar cambios.⁸ Una de las maneras más eficaces de reducir la

desigualdad de un país es aplicando un sistema fiscal justo.

Los resultados del último estudio del Fair Tax Monitor (2018) muestran cómo el Gobierno de Uganda está poniendo un mayor énfasis en la eficiencia de la recaudación fiscal que en los principios de igualdad y de progresividad fiscal.⁹ A pesar de este enfoque de recaudación fiscal eficiente, el país pierde ingresos debido a exenciones e incentivos fiscales que representan el 16% del total de la recaudación fiscal (lo que equivale aproximadamente al presupuesto agrícola del país).

El informe de 2018 del Fair Tax Monitor muestra que el sistema fiscal es en general regresivo (poniendo un mayor peso fiscal relativo sobre las personas en situación de pobreza) y que depende de los impuestos indirectos para recaudar el 68% de sus ingresos fiscales. La población ugandesa que vive en la pobreza invierte una mayor proporción de sus ingresos al consumo de productos de primera necesidad que los grupos más pudientes, por lo que los impuestos indirectos representan un mayor porcentaje de sus ingresos. En el caso de las mujeres, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) tiene un carácter regresivo ya que, debido a las normas de género en el país, son las principales cuidadoras y asumen la responsabilidad de comprar alimentos, medicinas y bienes y servicios para el hogar. Por ejemplo, el IVA incrementa el coste del agua y la electricidad, lo que aumenta la carga fiscal que recae sobre las mujeres. Por lo tanto, este tipo de impuestos está aumentando la desigualdad económica y de género en Uganda.

El Fair Tax Monitor ofrece a SEATINI y a Oxfam en Uganda una gran credibilidad en el debate nacional sobre fiscalidad. Los datos proporcionados por el Fair Tax Monitor constituyen una base empírica esencial a la hora de promover una fiscalidad más justa, y se utilizan para fomentar la participación de los responsables de la elaboración de políticas y miembros del Parlamento en esta cuestión. Aparte de Oxfam y SEATINI, otros miembros de la red Tax Justice Alliance Uganda (TJAU)¹⁰ también utilizan los datos que aporta el informe del Fair Tax Monitor para definir sus propias posturas en relación con los ingresos fiscales anuales y el presupuesto nacional.

Además de colaborar con el Parlamento, los actores de la sociedad civil han trabajado para incluir la cuestión de la fiscalidad justa en la agenda de la ciudadanía. Oxfam en Uganda y sus organizaciones socias llevan trabajando desde 2016 para sensibilizar a la ciudadanía a través de una campaña pública que empezó mostrando el carácter injusto de la legislación, que permite que las y los diputados no paguen impuestos sobre una parte de sus ingresos. Es fundamental que la ciudadanía sea consciente de que está pagando tanto impuestos directos como indirectos, vinculándola en un contrato social con el Estado. Este contrato concede a la ciudadanía el derecho a exigir servicios públicos a cambio y a instar al Gobierno a que rinda cuentas para que aplique una fiscalidad justa y reduzca la desigualdad.

RESPONSABILIDAD FISCAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD - IGUALES

OXFAM EN UGANDA: UNA FISCALIDAD JUSTA A TRAVÉS DE UNA INCIDENCIA POLÍTICA BASADA EN DATOS EMPÍRICOS Y LA CIUDADANÍA ACTIVA

CUADRO 2: CÓMO EL IMPUESTO SOBRE EL USO DE TELÉFONOS MÓVILES PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS HA REDUCIDO LOS RECURSOS DEL GRUPO POBLACIONAL MÁS POBRE DE UGANDA

Atim Grace Okor, una pequeña agricultora del este de Uganda, había ahorrado el dinero suficiente para pagar los costes médicos de su hijo después de ser admitido y tratado de malaria en un centro de salud privado del distrito de Serere (alrededor de 45 000 chelines ugandeses, el equivalente a 12,10 dólares estadounidenses). El tratamiento contra la malaria basado en combinaciones de artemisinina tiene un coste de entre 5,40 y 12,00 dólares estadounidenses, cuando alrededor del 40% de la población ugandesa vive con menos de un dólar al día. La mayor parte de la población tiene que recurrir a centros de salud privados, ya que la mayoría de los centros públicos no dispone de los medicamentos suficientes.

Atim había depositado el dinero en su teléfono a través de una plataforma para realizar transferencias bancarias desde el teléfono móvil, pero la transferencia estaba sujeta a un impuesto del 1% (450 chelines ugandeses), por lo que la suma se redujo a 44 550. Luego transfirió el dinero a la cuenta móvil del centro de salud, aplicando otro impuesto del 1% además del cargo por transferencia impuesto por la compañía de telefonía (de 1000 chelines ugandeses), por lo que la cantidad total fue de 43 104,50. El centro de salud inició luego el proceso para pagar los costes médicos por lo que al extraer el dinero de la cuenta del teléfono móvil, se le aplicó otro impuesto del 1% además de un cargo de retirada de efectivo de 8 chelines ugandeses. Debido a estas deducciones, los 45 000 chelines ugandeses de Atim se redujeron a 42 665,50 (alrededor de 11,40 dólares), que no bastaron para cubrir completamente los costes médicos (44 000 chelines).

Se trata de un claro ejemplo de cómo los impuestos regresivos perjudican más a las personas con ingresos bajos al reducir su renta disponible e incrementar sus gastos directos en salud y otros servicios públicos.

CÓMO EL IMPUESTO SOBRE EL USO DE TELÉFONOS MÓVILES PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS SIRVIÓ COMO CATALIZADOR PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Las acciones públicas han ido incrementado la sensibilización ciudadana progresivamente, lo que se hizo evidente en julio de 2018 cuando las y los ciudadanos salieron a la calle para pedir un sistema fiscal justo como respuesta directa a la nueva legislación fiscal que el Gobierno había promulgado: un impuesto sobre el uso de teléfonos móviles para realizar transferencias.

Uganda es un país que presenta una cobertura de telefonía móvil elevada y donde más del 50% de la ciudadanía tiene teléfono móvil. Esta cifra continúa ascendiendo, y son las zonas rurales las que experimentan un crecimiento más rápido. Desde 2009, la población ugandesa ha podido realizar transferencias bancarias a través del teléfono móvil, lo que ha facilitado el envío de dinero en todo el país, así como el pago de facturas, permitiendo además que los pequeños negocios puedan tramitar pagos. Esto ha generado una gran actividad económica, ya que anteriormente el número de bancos y de proveedores de servicios financieros con cobertura nacional en el país era limitado. Las transferencias bancarias a través de teléfono móvil se han integrado rápidamente en la vida cotidiana de la población de Uganda.

La precaria situación financiera del país ha obligado al Gobierno a plantearse incrementar la movilización de ingresos domésticos. Como las transferencias bancarias a través del teléfono móvil son un servicio tan ampliamente

utilizado, el Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico vio este impuesto como una excelente oportunidad para incrementar los ingresos fiscales. En julio de 2018 se introdujo un impuesto a las transferencias bancarias desde el teléfono móvil, aplicando un 1% de impuestos sobre cualquier suma de dinero depositado en una cuenta telefónica, un 1% adicional sobre el dinero transferido a otra cuenta y otro 1% más sobre el dinero cobrado o retirado de una cuenta telefónica.

Cuando las organizaciones de la sociedad civil de Uganda descubrieron que se estaba redactando esta ley, comprendieron inmediatamente el gran impacto que tendría en la vida de las personas y en su actividad económica en todo el país. Estas organizaciones coordinaron una





respuesta de la sociedad civil a la ley en abril de 2018 y redactaron una postura política común. Destacaron las posibles repercusiones negativas de la ley y sugirieron otras vías para la movilización de recursos (como controlar la evasión fiscal y la pérdida de ingresos por exenciones fiscales) que permitirían recaudar más ingresos que el impuesto a las transferencias realizadas a través del teléfono móvil. El Civil Society Budget Advocacy Group (CSBAG),¹¹ SEATINI y otras organizaciones de la sociedad civil al amparo de TJAU iniciaron el debate sobre esta ley con las y los diputados y buscaron la participación de los medios de comunicación. Expresaron su preocupación sobre las repercusiones negativas de dicho impuesto, especialmente para las personas con ingresos bajos y aquellas que realizan pequeñas transferencias, y recomendaron encarecidamente a las y los diputados que votasen en su contra. Sin embargo, la mayoría votó a favor de la ley y este impuesto entró en vigor el 1 de julio de 2018.

Se produjo inmediatamente una protesta pública por cómo el nuevo impuesto afectaba de manera desproporcionada a los ingresos de las personas en situación de pobreza. Varias organizaciones de la sociedad civil, junto con periodistas de investigación, estudiantes y grupos ciudadanos, incluyendo asociaciones de proveedores de transferencias bancarias por teléfono móvil, decidieron tomar las calles para manifestarse. Organizaron protestas a lo largo del país, tanto en zonas urbanas como rurales, en las que la población unió fuerzas para protestar contra el impuesto. Esto provocó represalias por parte del Gobierno, como el arresto y el uso de la fuerza física contra ciudadanos y ciudadanas, y la dispersión de algunas protestas por medio

de la violencia estatal. No obstante, el 19 de julio, tras una segunda ola de acción ciudadana y actividades de campaña, el Gobierno devolvió esta ley al Parlamento para ser enmendada, reduciendo el impuesto del 1% al 0,5% para la retirada de efectivo de una cuenta móvil, y eliminando los cargos fiscales relacionados con el depósito de dinero y su transferencia a otra cuenta.

¿CUÁL HA SIDO EL PRINCIPAL PUNTO POSITIVO DE ESTA LUCHA POR UNA FISCALIDAD JUSTA?

El hecho de que el impuesto a las transferencias realizadas a través del teléfono móvil llegase a modificarse demuestra que ejercer presión sobre el Gobierno tanto en negociaciones como manifestándose en la calle puede resultar eficaz. La coalición de actores que luchó contra la fiscalidad injusta representaba a una gran parte de la población ugandesa, expresando con éxito sus preocupaciones y necesidades ante el Gobierno.

La colaboración y el intercambio de información ayudó a las organizaciones de la sociedad civil a fortalecer su posición. Al unir fuerzas, consiguieron transmitir mensajes similares a través de diversas estrategias, como revisiones técnicas, documentos de posición, reuniones de incidencia con diputados y diputadas, el intercambio de información sobre fuentes alternativas de financiación, la colaboración con los medios de comunicación y la organización de conferencias de prensa y campañas.

La sociedad civil aprovechó su amplia experiencia luchando por un sistema fiscal justo para fomentar la que los diputados y diputadas se implicaran en el tema antes de que

RESPONSABILIDAD FISCAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD - IGUALES

OXFAM EN UGANDA: UNA FISCALIDAD JUSTA A TRAVÉS DE UNA INCIDENCIA POLÍTICA BASADA EN DATOS EMPÍRICOS Y LA CIUDADANÍA ACTIVA



se introdujera oficialmente el impuesto inicial del 1% sobre las transferencias a través del teléfono móvil. A través de una campaña continua de sensibilización, cada vez más personas comprendieron los efectos negativos que este impuesto podría tener en su día a día. Las organizaciones de la sociedad civil se implicaron en esta iniciativa desde un primer momento, lo que reforzó su mensaje y credibilidad a la hora de continuar pronunciándose sobre esta cuestión una vez que la ley fue aprobada por el Parlamento.

TRABAJO DE INFLUENCIA A NIVEL INTERNACIONAL PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD NACIONAL

Además de luchar por un sistema fiscal justo en Uganda, el objetivo de Oxfam y sus organizaciones socias era también reducir la desigualdad defendiendo un gasto público progresivo. Esto implica reforzar la conexión entre la ciudadanía y el Estado, además de garantizar que las necesidades y los intereses de la ciudadanía se tengan en cuenta en los procesos de ejecución y planificación de presupuestos nacionales, así como en la aplicación de otras reformas de gestión de las finanzas públicas.

Como se destacó anteriormente, el creciente déficit presupuestario del país limita ampliamente el gasto en el sector social y el espacio fiscal. Oxfam continúa abogando por los préstamos externos e internos de carácter sostenible a medida que la carga de la deuda externa de Uganda va reduciendo el espacio fiscal para la inversión en sectores sociales. La deuda representa un gran reto que debe abordarse para que el país pueda reducir sus niveles de pobreza y desigualdad.

Debido al creciente déficit presupuestario, el Gobierno de Uganda está contrayendo préstamos con instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco

Africano de Desarrollo y otras instituciones financieras asiáticas. Estas instituciones conceden préstamos bajo ciertas condiciones, las cuales afectan a los resultados en cuanto al desarrollo de los sectores sociales prioritarios en Uganda, como la salud, la educación y la agricultura.

Teniendo en cuenta la influencia que tienen las instituciones financieras internacionales sobre el sector privado, Oxfam y sus organizaciones socias no solo están tratando de ejercer presión sobre el Gobierno nacional, sino también transmitir su mensaje a Washington, D.C., donde se encuentran las sedes del Banco Mundial y del FMI. Su primera visita en el marco del proyecto Strategic Partnership Finance for Development tuvo lugar en 2017, cuando Oxfam y CSBAG solicitaron ofrecer una sesión sobre políticas en materia de "reformas eficaces de gestión de finanzas públicas con una perspectiva ciudadana" y compartir experiencias sobre cómo la ciudadanía y la sociedad civil deben participar en el desarrollo y la aplicación de procesos de reforma de la gestión de las finanzas públicas. Uno de sus objetivos fue el de ejercer presión sobre la oficina del FMI en Uganda, que hasta ese momento nunca había colaborado con la sociedad civil de manera estructurada.

Desde entonces, Oxfam en Uganda y sus organizaciones socias han visitado la sede del FMI en Washington anualmente y han participado en cuestiones clave de política fiscal de una manera estructurada. Ahora se están abriendo paso en la oficina local del FMI en Uganda y han ejercido presión sistemáticamente para que se adopte un enfoque más inclusivo hacia la gestión de las finanzas públicas. Han instado al FMI a basar sus análisis del panorama económico no solo en tecnicismos macroeconómicos sino a integrar también un análisis de la desigualdad y sus repercusiones para los resultados de



desarrollo. CSBAG ha compartido experiencias de éxito en cuanto a reformas de gestión de las finanzas públicas con una perspectiva ciudadana. Por su parte, SEATINI-Uganda ha compartido sus propias experiencias en relación con la función de la ciudadanía a la hora de promover la movilización de ingresos fiscales internos y políticas fiscales responsables. El mayor logro resultante de estas colaboraciones con instituciones financieras internacionales como el FMI ha sido, por una parte, el establecimiento de un compromiso estructurado entre organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía y, por otra, entre instituciones financieras internacionales y el Gobierno en cuanto al desarrollo y la aplicación de reformas del modelo de gestión de las finanzas públicas.

¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO DE ESTAS INICIATIVAS DE LA CIUDADANÍA, LA SOCIEDAD CIVIL Y OXFAM EN UGANDA?

Gracias a la gran ola de protestas, la participación continua de las organizaciones de la sociedad civil y la extensa cobertura mediática, la ley del impuesto a las transferencias a través de teléfonos móviles llegó a modificarse y se adoptaron cambios como la supresión del impuesto del 1% sobre depósitos y transferencias y la reducción del tipo

impositivo de las retiradas de efectivo, que pasó del 1% al 0,5%. No obstante, aunque la situación haya mejorado, el impuesto al dinero móvil continúa teniendo un carácter regresivo, ya que impone una carga demasiado pesada a las actividades económicas de pequeña escala en todo el país. La sociedad civil de Uganda continúa abogando por la total eliminación de este impuesto, incluso cuando esta propuesta fue rechazada en el proyecto de ley de finanzas para el ejercicio 2019/20.

Tras la visita a las sedes del FMI y el Banco Mundial, los actores de la sociedad civil lograron que estas dos instituciones renovaran su compromiso de trabajar con la sociedad civil ugandesa para promover sistemas fiscales justos y apoyar la participación de la sociedad civil y la ciudadanía en los procesos de transparencia y rendición de cuentas a nivel presupuestario y fiscal. Este compromiso fue confirmado por Moses Kaggwa, responsable del Departamento de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas de Uganda, quien garantizó que el Gobierno colaboraría con la sociedad civil para promover una fiscalidad justa e incluiría a la sociedad civil en la aplicación de reformas de gestión de las finanzas públicas en el país.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO DE ESTE TRABAJO?

- **Es fundamental contar con una base sólida de datos empíricos:** Oxfam y sus organizaciones socias llevan años colaborando en el marco del Fair Tax Monitor y estudios fiscales similares, lo que les ha permitido generar datos precisos y una base empírica oportuna que han utilizado ampliamente actores de la sociedad civil, además del propio Gobierno. Esto ha otorgado credibilidad a la sociedad civil así como la oportunidad de participar en el desarrollo y la aplicación de políticas responsables en materia de fiscalidad y gasto público en Uganda.
- **La clave es trabajar en coalición y de manera solidaria:** La campaña pública sobre el impuesto al dinero móvil tuvo un gran alcance al compartirse con varios actores de distintos sectores y ámbitos de trabajo. Oxfam y sus organizaciones socias no solo se pusieron en contacto y movilizaron a otros actores de la sociedad civil, sino que también solicitaron la colaboración de grupos de estudiantes, periodistas de investigación y asociaciones de proveedores de transferencias bancarias por teléfono móvil con el fin de unir fuerzas contra este nuevo impuesto regresivo.
- **Es importante ejercer influencia no solo sobre las políticas gubernamentales, sino también sobre las instituciones financieras internacionales que influyen en estas políticas:** Para Oxfam, esto implicó llevar la agenda

nacional de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil a la sede del FMI en Washington, además de ejercer presión para lograr un compromiso estructurado entre la sociedad civil y el FMI en Uganda. Esto ha permitido que Oxfam y otras organizaciones de la sociedad civil del país dispongan de oportunidades de manera periódica para compartir sus perspectivas sociales e incorporar un enfoque sobre desigualdad en los análisis económicos de carácter técnico que lleva a cabo el FMI en Uganda.

- **Las campañas lideradas por la ciudadanía pueden abrir y ampliar el espacio de debate sobre políticas fiscales:** Las campañas lideradas por la ciudadanía amplifican el poder de las personas para lograr políticas fiscales justas y tienen un mayor impacto si se complementan con investigaciones oportunas, una base empírica y actividades de sensibilización. Garantizar que la ciudadanía conozca sus derechos es vital para que los pueda reivindicar y exigir al Gobierno que rinda cuentas.
- **Reforzar los vínculos entre los niveles local, regional y global resulta útil:** Oxfam y sus organizaciones socias en Uganda han unido fuerzas para colaborar de una manera más eficaz con instituciones financieras internacionales y, en el marco de este trabajo, las organizaciones han podido aprovechar las redes, las conexiones y el asesoramiento técnico de Oxfam en otros contextos.

© Oxfam Internacional, marzo de 2020

Para más información, póngase en contacto con los autores:

ROSELIE SCHONEWILLE

Roselie.Schonewille@oxfamnovib.nl

JOSEPH OLWENYI

Joseph.olwenyi@oxfam.org

ACERCA DE ESTE ESTUDIO DE CASO

Este estudio de caso forma parte del Fiscal Justice Track Record de Oxfam. Este informe es una continuación del documento de Oxfam **Global Track Record on Fiscal Justice** (2016) y ofrece una actualización exhaustiva sobre el trabajo de Oxfam y sus organizaciones socias en materia de justicia fiscal y desigualdad en determinados países.

El programa de Oxfam F.A.I.R.-Even it Up tiene como objetivo garantizar que la ciudadanía esté empoderada para responder a las desigualdades de poder e influencia con el fin de que los sistemas fiscales sean más progresivos y los Gobiernos apliquen políticas fiscales y de gasto que beneficien a la mayoría y no solo a las élites. El programa F.A.I.R.- Even it Up engloba el trabajo de Oxfam y sus organizaciones socias en más de 40 países.

En Uganda, esta labor cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y Sida (Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo).

NOTAS

- ¹ World Population Review. (2020). *Uganda Population 2020*. <http://worldpopulationreview.com/countries/uganda-population>
- ² Oxfam. (2016). *Who is Growing? Ending Inequality in Uganda*. https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/oxfam_in_uganda_inequality_report_compressed.pdf
- ³ Discurso sobre el presupuesto nacional del año fiscal 2019/20, ministro de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico.
- ⁴ <https://www.pwc.com/ug/en/assets/pdf/budget-bulletin-19-2020-ug.pdf>
- ⁵ Fondo Monetario Internacional (FMI). (2019). Informe sobre el Artículo IV en Uganda.
- ⁶ Segundo Plan de Desarrollo Nacional: <http://npa.go.ug/wp-content/uploads/NDPII-Final.pdf>
- ⁷ <https://maketaxfair.net/ftm/>
- ⁸ El Fair Tax Monitor evalúa también el sistema fiscal en términos de suficiencia de ingresos, exenciones fiscales, eficacia de la administración fiscal, las prioridades de gasto del Gobierno, y la transparencia y la rendición de cuentas en el marco del sistema.
- ⁹ Fair Tax Monitor Study, Uganda, octubre de 2018. <https://maketaxfair.net/assets/Fair-Tax-Monitor-Uganda-Report-2.pdf>
- ¹⁰ TJAU. <https://www.tjau.or.ug/index.php/about-us/who-we-are#>
- ¹¹ CSBAG. <https://csbag.org/>

FOTOS

Página 1: La población tomó las calles de la ciudad de Soroti (en la región oriental de Uganda) el 21 de enero de 2019 durante una semana de actividades contra la desigualdad en el marco de la campaña de Oxfam sobre Davos. Foto: Emmanuel Museruka

Página 2: Actividad económica en una calle típica de Kampala. Foto: Emmanuel Museruka

Página 4: Clare Atukunda, encargada de realizar transferencias bancarias a través del teléfono móvil, otorga créditos en Kamwokya, un distrito de Kampala. Foto: Emmanuel Museruka

Página 5: Sarah Tebesigwa, propietaria de un pequeño negocio, se vio gravemente afectada por el impuesto a las transferencias realizadas a través del teléfono móvil. Foto: Emmanuel Museruka

Página 6: Jane Natunga de SEATINI Uganda (sentada, tercera a la derecha) se dirigió a las y los participantes en una sesión de alto nivel sobre políticas fiscales en el marco de las reuniones de primavera entre el FMI y el Banco Mundial que tuvieron lugar en Washington, D.C. en abril de 2019. Foto: Joseph Olwenyi.



OXFAM